Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 164 Bis, a la **Constitución Política del Estado de Coahuila.**

* **En materia derecho sancionador en materia electoral.**

Planteada por la **Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda,** de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

Fecha de Lectura de la Iniciativa: **18 de Septiembre de 2019.**

Turnada a la **Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia**

**Lectura del Dictamen:**

**Lectura de la Declaratoria:**

**Decreto No.**

Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 164 BIS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DERECHO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa por la que se adiciona el artículo 164 bis a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de derecho sancionador electoral:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

México es uno de los países del mundo que más ha regulado la materia electoral y esto es así, en gran parte por la desconfianza sobre la cual se ha fundado nuestro sistema político; la falta de competencia real, el constante fantasma del fraude electoral y la poca credibilidad que generan los actores políticos e instituciones electorales en la ciudadanía, han contribuido a que nuestro sistema electoral se refuerce y complejice, por lo general después de que hay elecciones importantes.

Las constantes reformas en la materia han permitido instituciones jurídicas sólidas, así como organismos electorales confiables y comicios competidos, en los que las fuerzas políticas se enfrentan con posibilidades reales de ganar, siempre y cuando su plataforma política convenza a las y los electores.

Pese a los grandes avances que la materia ha tenido en los últimos años, existen todavía áreas de oportunidad en las cuales hace falta legislación. Tal es el caso de las sanciones electorales a los servidores públicos que no tienen superiores jerárquicos y que han cometido alguna violación al orden jurídico electoral. En estos casos y no obstante que un tribunal haya declarado su responsabilidad es imposible sancionarlos dado que no existen los tipos legales, ni tampoco hay competencia expresa para hacerlo.

Un ejemplo de esto, se discutió ya ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el asunto SUP-REP 102/2015, en el cual, el citado órgano jurisdiccional sostuvo que, si bien es cierto que en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se detallan las sanciones que pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables en materia electoral, el legislador omitió incluir un apartado respecto de las conductas realizadas por esas autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales sin superior jerárquico.

De este modo, los servidores públicos sin superior jerárquico fueron colocados en un ámbito específico dentro del derecho administrativo sancionador electoral, pues respecto de estos entes, de conformidad con el actual esquema que rige los procedimientos especiales sancionadores, el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones para investigar si alguna de las conductas desplegadas resulta contraria a Derecho, y en caso de que así sea, la Sala Regional Especializada puede establecer si el servidor público es responsable de dicha conducta; pero, como se adelantó, carece de la atribución expresa para imponer directamente alguna sanción por tales conductas.

Con base en este razonamiento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la tesis jurisprudencial XX/2016 cuyo rubro es: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDICO.

Tal criterio jurisprudencial, sostiene que para hacer efectivo y funcional el régimen administrativo sancionador electoral, resulta procedente que las autoridades electorales jurisdiccionales hagan del conocimiento de los congresos locales las determinaciones de responsabilidad de los servidores públicos sin superior jerárquico, para que impongan las sanciones correspondientes. Lo anterior, a fin de hacer efectivo el sistema punitivo en que se basa el derecho sancionador electoral y, por ende, para proporcionarle una adecuada funcionalidad.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa de reforma constitucional pretender dar fuerza vinculante al criterio de la Sala, a través del establecimiento de un artículo que contenga las sanciones aplicables a funcionarios públicos que hayan violentado el ordenamiento electoral y que no tengan un superior jerárquico, como lo son los miembros de los ayuntamientos, el gobernador del Estado o los titulares de los órganos autónomos, entre otros.

Con esta iniciativa buscamos hacer efectiva la responsabilidad que pudieran tener algunos funcionarios públicos y que, por la estructura legal actual, se hace imposible su cumplimiento debido a la falta expresa de sanciones tanto en la constitución como en las leyes locales.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se adiciona el artículo 164 bis a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 164 bis. Cuando la autoridad jurisdiccional competente haya determinado que un servidor público sin superior jerárquico cometió alguna conducta contraria al orden jurídico en materia electoral, el Congreso del Estado de Coahuila podrá imponer bajo los criterios de estricta proporcionalidad y con independencia de la responsabilidad que pudiera existir en otras materias, las sanciones siguientes:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta de diez mil unidades de medidas y actualización;

III. Destitución del servidor público y en su caso, inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía exhortamos respetuosamente a las compañeras y compañeros diputados a que se sumen a esta iniciativa para que sea votada a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de septiembre de 2019.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**